

Si perdemos el TIPNIS perderemos las TCOs y las Áreas Protegidas

Recibe la alarma por un enfrentamiento entre los colonizadores que bloquean Yucumo y los indígenas que marchan exigiendo básicamente sus derechos constitucionales. La meta de los bloqueadores según sus dirigentes es forzar a los indígenas a dialogar con el gobierno; y que retiren su oposición a la carretera del TIPNIS y sus demandas de tierra y territorio. Sus intereses son claros. Ya antes de la marcha, el máximo dirigente nacional de los colonizadores, G. Aliaga, dijo: “Tarde o temprano entraremos al TIPNIS por tierras” y “...que estaban decididos a atacar a los indígenas” si marchaban contra la carretera.

El 7/9 llegaron 450 policías al bloqueo; según el gobierno no desbloquearán y no dejarán pasar la marcha; y ahora sobran testimonios de que permiten a los bloqueadores revisar movibilidades, decomisar alimentos, incluso detener personas; actuando como una especie de parapoliciales. Pese a los hechos y a las propias declaraciones de los bloqueadores, prometiendo “reventar” a los marchistas y a los que se solidaricen, el gobierno niega que exista el bloqueo y que sea violento. La policía además reprimió bloqueos indígenas en otras partes del país a favor de la marcha.

Como los colonizadores, Morales objetó las demandas de tierras de los indígenas “...cuando son los principales beneficiarios...”; y ante esta situación en las TCO, dijo que promoverá un debate, ya que en promedio cada familia tiene más de 800 has (también dijo 450 has). G. Aliaga a su vez, quería debatir con los indígenas porque “cada uno de ellos tienen más de 20.000 has”, y pidió se apruebe la ley de tierras propuesta por el Pacto de Unidad. En conclusión detrás de bloqueo de Yucumo están los planes de liquidar los TCOs y los grandes terratenientes han sido perdonados.

La forma en que el gobierno condujo las negociaciones es compleja. Lanzó una campaña de acusaciones contra los dirigentes marchistas basadas, entre otras, en una lista de llamadas a la embajada de EE.UU., sin especificar cuál era el delito; acusó a las ONGs de financiar la marcha e inclusive a las NN.UU. y al Defensor del Pueblo de estar afiliados a la marcha.

Al inicio de la marcha el ministro Romero, dijo “No hay conversación posible...(con)...una marcha cuando ésta no está justificada.” Luego quiso meter otros sectores a la consulta previa poniéndolos en conflicto con los indígenas. Y recién, el canciller Choquehuanca, a modo de negociar, dijo a los marchistas que las decisiones que toma el Presidente sobre la carretera no se cambian. Después les entregó la respuesta del Presidente a sus peticiones, manifestando su disposición de realizar la consulta con todos los habitantes del TIPNIS; pero al mismo tiempo, el Presidente anunciaba que iría al TIPNIS, a conversar con los desertores de la marcha, promoviendo la división entre los consultados.

Pese a que el Presidente se negó a ir a negociar a la marcha, asistió de buena gana a un evento organizado por la constructora de la carretera, la OAS, (parte en el conflicto) donde estuvo Lula. Morales, además de Presidente mantiene su cargo de principal dirigente de los coccaleros, -otra parte en el conflicto- y en esa condición es responsable de las amenazas y acciones que estos están tomando, además de la responsabilidad de mantener dos cargos, en este caso, incompatibles.

En cuanto a la consulta, aparte de no cumplir la normativa, el gobierno la continúa degenerando. A pesar de estar constitucionalizada, dijo Morales, “no tienen carácter de obligatoriedad...”. Para Romero, “el gobierno está obligado a la consulta previa solamente a las comunidades involucradas”, desconociendo la integralidad de los TCOs y también desconociendo a la CIDOB. También pretendieron sustituir a los indígenas por otros sectores para la consulta y lo mismo consultar solo a una parte de los indígenas, ignorando a los dirigentes legalmente elegidos. Pero la figura legal es simple, como declaró el Defensor del Pueblo, el contrato con la OAS es ilegal por no haber cumplido primero con la consulta previa, esto es que los derechos de los indígenas son pisoteados desde hace años.

Para concluir, estamos ante el peligro de un ataque -no enfrentamiento- a los marchistas por fuerzas civiles y policiales, si eso ocurre, las responsabilidades son por demás evidentes ■

LA FORMA EN QUE EL GOBIERNO CONDUJO LAS NEGOCIACIONES ES COMPLEJA. LANZÓ UNA CAMPAÑA DE ACUSACIONES CONTRA LOS DIRIGENTES MARCHISTAS BASADAS, ENTRE OTRAS, EN UNA LISTA DE LLAMADAS A LA EMBAJADA DE EE.UU., SIN ESPECIFICAR CUÁL ERA EL DELITO; ACUSÓ A LAS ONGS DE FINANCIAR LA MARCHA E INCLUSIVE A LAS NN.UU. Y AL DEFENSOR DEL PUEBLO.